

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 30º Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-7952-2021
CARATULADO : MANRÍQUEZ/CON DEFENSA DEL ESTADO

Santiago, nueve de Diciembre de dos mil veintidós

VISTOS:

Con fecha 24 de septiembre de 2021, comparece don **Sergio Patricio Manríquez Zamorano**, domiciliado en La Petra N° 122, comuna de Santiago, interpone demanda de indemnización de perjuicios en contra del **Fisco de Chile**, representado por el Consejo de Defensa del Estado y este a su vez por su presidente, don Juan Antonio Peribonio Poduje, abogado, o por quien lo subroge, o por su sucesor, ambos con domicilio en calle Agustinas N° 1225 comuna de Santiago.

Funda la demanda, en que a la época en que ocurrieron los hechos, trabajaba en una oficina de arquitectura, que tenía a cargo los planes habitacionales de los trabajadores de Chuquicamata, estaba casado y habían nacido sus dos hijos mayores. En 1973, estaba cursando el último año de la carrera de Construcción Civil en la Universidad Técnica, sin embargo, con el golpe de Estado, se suspendieron las clases hasta el año siguiente, por lo que recién pudo egresar en 1974. Sin embargo, su carrera quedó trunca mientras estaba haciendo la memoria de título, la que no pudo terminar porque fue detenido y luego se vio en la necesidad de salir del país como refugiado político.

Afirma que era simpatizante y apoyó al gobierno de Salvador Allende, considerándose una persona de izquierda, pero que no militó en ningún partido político.

Refiere que, a un año del golpe, seguía trabajando en la oficina de arquitectos de dependencia de la CORFO. Al igual que hoy, vivía en la calle La Petra, en Santiago, en esa misma calle a pocas casas,



en ese entonces, también vivía la hermana del General Prats, y una familia de apellido de La Carrera. Luego supieron que estas personas los denunciaron, indicando que tenían armas en su casa, cuestión que no era así, pero los habían reconocidos como personas de izquierda.

En noviembre de 1974, una noche llegaron unos 10 o 15 militares a su casa, la allanaron, en búsqueda de las armas que supuestamente escondían, las cuales no encontraron, a pesar de que rompieron hasta el piso de la casa, solo encontraron propaganda en contra de la dictadura, pero igualmente detuvieron a su esposa, a sus cuñados, su suegro y a él. Los llevaron esa noche y dejaron ocupada la casa con militares (lo que se llamaba una ratonera), para detener a los que pudieran venir por las supuestas armas. Sus hijos que eran pequeños, de 10 y 12 años también estaban en la casa al momento del allanamiento, fueron testigos y sufrieron a temprana edad esa brutal experiencia, que aún al día de hoy, los aqueja. Ellos se quedaron con su cuñada y su hijo de un año de edad.

Refiere que esa noche fueron conducidos al Regimiento Tacna, encerrando a todos los hombres juntos, en un calabozo con más detenidos. A su esposa la dejaron aparte, incluso la intentaron violar. Al día siguiente los sacaron para interrogarles y los llevaron al segundo piso, con los ojos vendados para torturarlos, precisa que nunca vio a los torturadores. En ese lugar, tenían magnetos para ponerles corriente en la sien, lo golpearon y le aplicaron corriente. Estuvieron dos noches ahí, en donde fueron sometidos a interrogatorios, brutales golpizas y toda clase de torturas con aplicación de corriente, siempre vendados. Luego, los llevaron a la Venda Sexy, lugar donde los siguieron torturando, los tenían en un segundo piso donde estaban en una sala con 10 o 15 personas, permanecían vendados y tirados en el piso. Estuvo varios días ahí, con su esposa, cuñados y su suegro, los sacaban aleatoriamente, a él lo sacaron varias veces para interrogarlo, les ponían corriente en la sien, le interrogaban y torturaban, y su mujer, además, de ser brutalmente golpeada, sus verdugos la violaron reiteradamente. En la



Venda Sexy había un sótano, donde tenían catres metálicos para aplicar corriente. También lo bajaron a ese sótano, a la parrilla, tiraban agua y luego le ponían corriente, a veces paraban la parrilla, lo ponían cabeza abajo y aplicaban corriente en distintas partes del cuerpo, principalmente en los genitales, otras veces lo hacían en forma horizontal. Asimismo, fue sometido a vejaciones inenarrables, como el intento de violación por un perro.

Agrega que, después de varios días, los llevaron a Tres Álamos, donde estuvieron incomunicados varios días, pudieron avisar a otros detenidos que pasaron a libre plática que estaban detenidos ahí, para que informaran a sus respectivas familias, que no sabían de su paradero. Su cuñada tenía contactos en el Arzobispado, quienes hicieron algunas gestiones y fueron informados que estaban detenidos en dicho recinto, ya que fueron reconocidos como detenidos por Arellano Stark, lo que cree que les salvó de pasar a integrar las listas de detenidos desaparecidos. Luego, pasaron a libre plática en Cuatro Álamos, hasta enero de 1975; estando ahí le enviaron de la oficina de arquitectura dependiente de CORFO, en la que trabajaba, el finiquito, por lo que mientras estuvo detenido fue despedido por "abandono de trabajo".

Menciona que en enero de 1975, fueron trasladados con su suegro y uno de sus cuñados a Ritoque, ya que para entonces tenían categoría de "prisioneros de guerra", sin juicio. Su esposa quedó en Cuatro Álamos, fue liberada a principios de mayo, y a ellos los liberaron a mediados de mayo. Cuando regresaron a su casa, se dieron cuenta que tenían un punto fijo, les vigilaban y seguían todos sus movimientos, lo que les dio mucho miedo, por lo cual decidieron que era urgente y necesario salir del país. De esta manera, gestionaron visas y consiguieron irse a Venezuela, lamentablemente en un principio sin sus hijos, en calidad de refugiados por ACNUR que les consiguieron los pasajes y protección.

Agrega que cuando llegaron a Venezuela, declararon ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Al comienzo les resultó



difícil adaptarse, pues no tenía dinero ni trabajo, su esposa no pudo conseguir trabajo por ser extranjera, lo que afectó el proyecto de vida común. Señala que en Chile ella trabajaba en estadísticas en salud, en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, sin embargo, en Venezuela solo pudo hacer pequeñas labores y costuras. El tuvo más suerte, y finalmente luego de unos meses, consiguió empleo por un chileno que le conocía y logró trabajar en su profesión.

Indica que, en 1982 regresaron a Chile, alcanzando a vivir en Venezuela casi ocho años. Desgraciadamente cuando regresó no tuvo opciones de trabajo, por su situación de ex preso político, no lo querían contratar, fueron años muy difíciles, muy duros, y solo logró conseguir trabajos esporádicos a través de amigos.

Refiere que esta situación marcó de manera determinante su vida. La prisión, los vejámenes, las torturas, los apremios, la parrilla, la brutalidad experimentada en esos momentos, su esposa sometida a torturas y violaciones reiteradas, la incertidumbre de lo que podría venir después, es brutal e imposible de olvidar, y sólo resta aprender a vivir con tan terribles recuerdos. Asevera que lo que sufrió y presenció es prácticamente inenarrable. Desde el mes de noviembre de 1974, cuando fue detenido por agentes del Estado de Chile (militares y DINA), y fue sometido a torturas y vejámenes, su proyecto de vida, su carrera, su trabajo, sus sueños y esperanzas, se truncaron; todo lo vivido en esos oscuros días, afectaron su vida, en todos los ámbitos; psíquico, físico, ya que producto de las torturas sufrió desprendimiento de retina, posteriormente sufrió la pérdida de visión del ojo derecho, y en la actualidad padece de semiceguera del ojo izquierdo, además, todo lo padecido por su esposa, las violaciones, torturas y vejámenes a las que fue sometida su compañera de vida por agentes del Estado, sus hijos, sus cuñados, la vida de amigos, compañeros, la vida de toda una generación de manera permanente.

Manifiesta que en 2004, el Estado de Chile, mediante el Informe de la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura (Valech I), lo



reconoció con el número 13947, como víctima de prisión política y torturas.

En cuanto a la responsabilidad del Estado de Chile señala que la Constitución Política de la República del año 1925, vigente a la época de los hechos, garantizaba a todos los habitantes de la República, la libertad, al disponer en sus artículos 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 un estatuto de derechos de las personas, deberes de las autoridades y requisitos para proceder a la privación de ella; y en la Constitución Política de la República de 1980 y sus modificaciones, resulta clara la responsabilidad civil del Estado emanada de los hechos descritos y de la intervención de sus agentes, considerando en particular lo dispuesto en el inciso primero del artículo 6 de la Constitución Política de la República, en cuanto los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, y garantizar el orden institucional de la República, disponiendo el inciso final de la norma citada que la infracción de la misma generará las responsabilidades y sanciones que determine la ley. Por otra parte, la Ley N° 18.575 de Bases Generales de la Administración del Estado, dispone en el artículo 4 "El Estado será responsable por los daños que causen los órganos de la administración en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren afectar al funcionario los hubiere ocasionado".

Asimismo, indica que el artículo 38 inciso 2° de la Constitución Política de la República establece que cualquier persona que sea lesionada en sus derechos por el Estado podrá reclamar ante los tribunales de justicia. Este precepto consagra una verdadera acción constitucional para hacer efectiva la responsabilidad de los organismos del Estado, cuando estos por su actividad provoquen un daño en sus derechos a una persona.

Por otra parte, hace presente que en el marco del reconocimiento de la violación de los derechos humanos en nuestro país por parte de agentes del Estado durante la dictadura militar, se dictó en el año 1992 la Ley N° 19.123, mediante la cual se creó la



Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, a la cual, entre sus diversos objetivos, se le encomendó especialmente promover la reparación del daño moral de las víctimas de violaciones a los derechos humanos o de violencia política. A su vez, la Ley N° 19.992 estableció una pensión anual de reparación en beneficio de las víctimas directamente afectadas por violaciones a los derechos humanos individualizadas en el anexo "Listado de prisioneros políticos y torturados", de la Nómina de Personas Reconocidas como Víctimas, que forma parte del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura. Por último, destaca la Ley N° 20.874 que concedió un aporte único, en carácter de reparación parcial a los titulares individualizados en la Nómina de Personas Reconocidas como Víctimas del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura y, que será imputable al monto que, en su caso, se otorgue por concepto de reparación pecuniaria a cada víctima de prisión política y tortura.

Por otro lado, arguye que la correcta resolución del caso sometido a su conocimiento, requiere la aplicación armónica de la Constitución Política, de los tratados internacionales sobre derechos humanos y de la Ley de Bases de la Administración del Estado. A contrario sensu, afirma que en este conflicto son improcedentes las reglas propias del derecho de daños contenidas en el Código Civil, toda vez que dicho estatuto se construye sobre premisas y principios diferentes al Derecho Público y al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, constituyendo un error de lógica y sistemática jurídica, la aplicación de normas de derecho privado a las situaciones en que se persigue la responsabilidad del Estado por actos dañosos, ya que ambos difieren en su naturaleza y fines, destinado a otras conductas e intereses.

Hace presente que la Constitución de la República en el artículo 5 inciso segundo, como ya se ha dicho, prescribe que el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, siendo deber de los



órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. En consecuencia, dicha disposición permite la incorporación al derecho nacional de las obligaciones contempladas en los instrumentos internacionales que recogen principios generales del derecho humanitario, entre las cuales se cuenta la obligación de indemnizar íntegramente los daños cometidos por violaciones de los derechos humanos, la que adquiere rango constitucional.

Por lo tanto, concluye que la cuestión sometida a conocimiento, no puede decidirse sobre la base de las normas del Código Civil, aplicables a delitos civiles comunes, representando un estatuto jurídico insuficiente para la entidad del hecho ilícito en cuestión, cual es, la comisión de crímenes de lesa humanidad, y la consecuente necesidad de reparación, debiendo por tanto la acción indemnizatoria en tal caso regirse bajo las normas que emanan del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del *ius cogens* o reglas imperativas de derecho internacional. En este sentido, la jurisprudencia interna (Cfr. I. Corte de Apelaciones de Santiago, Caso "Carrasco con Fisco de Chile", 10.07.2007, Rol N° 6.715-2002).

Sostiene que si se considera que la acción penal del delito de lesa humanidad es imprescriptible, la acción civil derivada del mismo hecho, no puede estar sujeta a las normas de Derecho Interno de prescripción patrimonial del derecho privado, lo que resulta incoherente y contraviene las normas de Derecho Internacional sobre Derechos Humanos, que forman parte del ordenamiento jurídico por disposición expresa del artículo 5° inciso 2° de la Constitución Política de la República.

Por lo tanto, advierte que para no desnaturalizar el tenor literal del artículo 2314 del Código Civil uno tendrá que reconocer que dicha norma fue diseñada para resolver ilícitos comunes y, por lo mismo, ante este caso, referido a la aplicación sistemática de la tortura, el



derecho aplicable debe hallarse más bien en el ámbito constitucional, administrativo e internacional.

Hace presente que la moderna jurisprudencia de la Corte Interamericana, sobre el artículo 63 de la Convención Americana ha dicho que “ese precepto acoge una norma consuetudinaria que constituye uno de los principios fundamentales del Derecho Internacional contemporáneo sobre la responsabilidad de los Estados. Al producirse un hecho ilícito imputable a un Estado, surge de inmediato la responsabilidad de éste por la violación de la norma internacional de que se trata, con el consecuente deber de reparar y hacer cesar las consecuencias de la violación. (...) la reparación del daño requiere, siempre que sea posible, la plena restitución (restitutio in integrum), (Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso “Masacre plan de Sánchez”. Reparaciones. (Art. 63.1, Convención Americana sobre Derechos Humanos], Sentencia de 19 de noviembre de 2004. Serie N° 116. Párrafos. 52-53).

Asimismo, menciona que Chile se ha obligado en tratados internacionales de ejecución, los cuales ha suscrito en la modalidad de declaraciones y resoluciones por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por ejemplo, los “Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones”, que en su Principio II delimita el objeto de la obligación del Estado en materia de vulneración de derechos fundamentales al establecer: “[...] La obligación de respetar, asegurar que se respeten y aplicar las normas internacionales de derechos humanos y el derecho internacional humanitario según lo previsto en los respectivos ordenamientos jurídicos comprende, entre otros, el deber de: a) Adoptar disposiciones legislativas y administrativas y otras medidas apropiadas para impedir las violaciones; b) Investigar las violaciones de forma eficaz, rápida, completa e imparcial y, en su caso, adoptar medidas contra los presuntos responsables de conformidad con el derecho interno e



internacional; c) Dar a quienes afirman ser víctimas de una violación de sus derechos humanos o del derecho humanitario un acceso equitativo y efectivo a la justicia, como se describe más adelante, con independencia de quién resulte ser en definitiva el responsable de la violación; y d) Proporcionar a las víctimas recursos eficaces, incluso reparación".

Por último, denota que el Principio 23 sobre restricciones a la prescripción del "conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad", aprobado por La Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, señala que "La prescripción no se aplicará a los delitos graves conforme el derecho internacional que sean por naturaleza imprescriptibles. Cuando se aplica, la prescripción no podrá invocarse en las acciones civiles o administrativas entabladas por las víctimas para obtener reparación".

Aduce que, debido a lo relatado, el Estado de Chile lo ha reconocido como víctima de prisión política y tortura y, como tal, en virtud de las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos vigentes en Chile, las propias normas constitucionales y la Ley de Bases de la Administración del Estado, unidas a la jurisprudencia nacional como internacional, es que solicita una indemnización por daño de carácter moral que se expresa en el dolor, el sufrimiento, la angustia, sensación de pérdida, rabia e impotencia, el abandono de la justicia, en una época de verdadero terror y ante la situación extremadamente violenta, injusta e ilegítima que vivió a manos de agentes del Estado.

Afirma la dolorosa situación a la que se ha visto enfrentado, siendo golpeado, torturado y viendo como su esposa, sus compañeros de prisión ilegítima, fueron torturados, golpeados, hasta desfallecer y muchos desaparecidos, además de la impotencia y sensación de injusticia experimentada cuando el terrorista, es el Estado. La pérdida de su proyecto de vida, el exilio en tierras extranjeras, todo esto constituye sin lugar a dudas un daño moral, el cual, según la



dogmática jurídica y la jurisprudencia nacional e internacional, amerita ser reparado a través de una indemnización de perjuicios.

Luego, hace presente que en la especie se ha acreditado suficientemente que ha sido víctima de privación de libertad y torturas a manos de agentes del Estado, luego del quiebre institucional acaecido en Chile en septiembre de 1973, lo que es bastante para haber generado el daño aquí alegado, lo que le ha supuesto una aflicción inenarrable, tanto espiritual como física, y que no ha sido superada por el transcurso del tiempo, y que es a consecuencia de un sistemático actuar despiadado llevado a cabo por agentes del Estado.

Con respecto de la prueba del referido daño moral en sede judicial, arguye que tanto la doctrina como la jurisprudencia mayoritaria coinciden en señalar que el daño moral no requiere ser probado en juicio en tanto se tenga por acreditado el hecho ilícito que lo ha generado. Por ello, basta que la víctima acredite la lesión de un bien jurídico personalísimo para que luego entonces se infiera -como consecuencia necesaria- el daño sufrido con ocasión del hecho ilícito cometido, caso que aquí ocurrió, desde que fue reconocido como víctima de violación a los derechos Humanos.

En cuanto al *quantum* de la indemnización, le resulta difícil decir cuál es el precio del dolor y sufrimientos que padeció al ser privado ilegítimamente de libertad, al ser torturado, electrocutado y sometido a diversos vejámenes al igual que su esposa, a tener que buscar la protección internacional y exiliarse en tierras extranjeras, ya que estos no tendrían precio.

En consecuencia, solicita tener por interpuesta demanda de indemnización de daños y perjuicios en contra del Fisco de Chile, representado por el Presidente del Consejo de Defensa del Estado, don Juan Antonio Peribonio Poduje, ya individualizado, acogerla a tramitación y, en definitiva, condenar al Fisco de Chile, a pagarle la suma de \$150.000.000, (ciento cincuenta millones de pesos), por concepto de aquellos daños morales que ha padecido con ocasión de los hechos cometidos en su contra por agentes del Estado de Chile, o



bien, lo que esta judicatura determine en justicia, cantidad que deberá ser reajustada de acuerdo a la variación del IPC, desde la fecha en que este tribunal dicte sentencia y la fecha del pago efectivo de la indemnización que en definitiva se establezca, junto con los intereses legales correspondientes durante el mismo período y las costas de la causa.

Con fecha 14 de diciembre de 2021, se notificó la demanda al Fisco de Chile.

Con fecha 6 de enero de 2022, la parte demandada contesta la demanda, solicitando su rechazo o, en subsidio, rebajar sustancialmente el monto indemnizatorio pretendido.

I.- Excepción de Reparación Integral

Como primera defensa, opone la excepción de reparación integral por haber sido ya indemnizado el actor.

Afirma que, desde la perspectiva de las víctimas, la reparación de los daños sufridos juega un rol protagónico en el reconocimiento de aquella medida de justicia por tantos años buscada.

En este sentido, las negociaciones entre el Estado y las víctimas revelan que tras toda reparación existe una compleja decisión de mover recursos económicos públicos, desde la satisfacción de un tipo de necesidades públicas a la satisfacción de otras radicadas en grupos humanos más específicos. Este concurso de intereses o medida de síntesis se exhibe normalmente en la diversidad de contenidos que las Comisiones de Verdad o Reconciliación proponen como programas de reparación.

Indica que, la reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos se ha realizado principalmente a través de tres tipos de compensaciones, a saber:

- a) Reparaciones mediante transferencias directas de dinero;
- b) Reparaciones mediante la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas; y
- c) Reparaciones simbólicas.



Sostiene respecto a las reparaciones mediante transferencias de dinero, que términos de costos generales para el Estado, este tipo de indemnizaciones ha significado, al mes de diciembre del año 2019, la suma total de \$ 992.084.910.400.

Refiere que el actor ha recibido beneficios pecuniarios al amparo de las leyes N° 19.992 y sus respectivas modificaciones. De este modo, se estableció una pensión anual de reparación y otorgó beneficios a favor de las personas afectadas por violaciones de derechos humanos individualizados en el anexo “Listado de prisioneros políticos y torturados” de la Nómina de personas reconocidas como víctimas, estableciendo una pensión anual reajutable de \$1.353.798 para beneficiarios menores de 70 años; de \$1.480.284 para beneficiarios de 70 o más años de edad y de \$1.549.422 para beneficiarios mayores de 75 años de edad. Adicionalmente, la actora recibió en forma reciente el Aporte Único de Reparación, en conformidad a la Ley N° 20.874 por la suma de \$1.000.000.

Expone que, se concedió a los beneficiarios tanto de la Ley 19.234 como de la Ley 19.992, el derecho a gratuidad en las prestaciones médicas otorgadas por el Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS) en Servicios de Salud del país. Para acceder a estos servicios la persona debe concurrir al hospital o consultorio de salud correspondiente a su domicilio e inscribirse en la correspondiente oficina del PRAIS.

Hace presente que, además del acceso gratuito a las prestaciones de la red asistencial, PRAIS cuenta con un equipo de salud especializado y multidisciplinario de atención exclusiva a los beneficiarios del Programa. En la actualidad cuentan con un equipo PRAIS en los 29 Servicios de Salud, compuesto en su mayoría por profesionales médicos psiquiatras, generales, de familia, psicólogos y asistentes sociales, encargados de evaluar la magnitud del daño y diseñar un plan de intervención integral, a fin de dar respuesta al requerimiento de salud de los beneficiarios. Asimismo, se les ofrece



apoyo técnico y rehabilitación física para la superación de lesiones físicas que sean producto de la prisión política o tortura.

Afirma que se incluyeron beneficios educacionales consistentes en la continuidad gratuita de estudios básicos, medios o superiores; y también beneficios en vivienda, correspondiente al acceso de subsidios de vivienda.

Manifiesta que parte importante de la reparación por los daños morales causados a las víctimas de DD.HH. se realiza a través de actos positivos de reconocimiento y recuerdo de los hechos que dieron lugar a aquellas violaciones. Este tipo de acciones pretende reparar, ya no a través de un pago de dinero paliativo del dolor –siempre discutible en sus virtudes compensatorias– sino precisamente tratando de entregar una satisfacción a esas víctimas que en parte logre reparar el dolor y la tristeza y con ello reducir el daño moral.

Manifiesta que, tanto las indemnizaciones que se solicitan en estos autos como el cúmulo de reparaciones antes indicadas pretenden compensar los mismos daños ocasionados por los mismos hechos. De esta forma, los ya referidos mecanismos de reparación han compensado aquellos daños, no procediendo, por ello, ser compensados nuevamente.

II.- Excepción de prescripción:

Asimismo, el demandado opone la excepción de prescripción de las acciones de indemnización de perjuicios con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2332 del Código Civil, en relación con lo dispuesto en el artículo 2497 del mismo cuerpo legal, solicitando que por encontrarse prescritas, se rechace la demanda en todas sus partes.

Manifiesta que, conforme al relato efectuado por el actor sus detenciones ilegales, la prisión política, los apremios ilegales y las torturas que sufrió ocurrieron entre noviembre de 1974 y mayo de 1975.

Sostiene que entendiendo suspendida la prescripción durante el período de la dictadura militar, iniciada en septiembre de 1973, por la imposibilidad de las propias víctimas de ejercer las acciones legales



correspondientes ante los tribunales de justicia, hasta la restauración de la democracia, a la fecha de notificación de la demanda de autos, esto es, el 14 de diciembre de 2021, igualmente ha transcurrido en exceso el plazo de prescripción extintiva que establece el citado artículo 2332 del Código Civil.

Por lo anterior, el demandado opone la excepción de prescripción de cuatro años establecida en el artículo 2332 del Código Civil y en subsidio, opone la excepción de prescripción extintiva de cinco años contemplada para las acciones y derechos en el artículo 2515, en relación con el artículo 2514 del Código Civil, ya que entre la fecha en que se habría hecho exigible el derecho a indemnización y la fecha de notificación de la acción civil, habría transcurrido el plazo que establece el citado artículo 2515 del Código Civil.

Advierte que, por regla general, todos los derechos y acciones son prescriptibles, por ende, la imprescriptibilidad es excepcional y requiere siempre declaración explícita, la que en este caso no existe. Pretender que la responsabilidad del Estado sea imprescriptible, sin que exista un texto constitucional o legal expreso que lo disponga, llevaría a situaciones extremadamente graves, absurdas y perturbadoras.

Agrega que entre las normas de interés está el artículo 2497 del citado cuerpo legal, que manda aplicar las normas de la prescripción a favor y en contra del Estado, cuyo tenor es el siguiente: *“Las reglas relativas a la prescripción se aplican igualmente a favor y en contra del Estado, de las iglesias, de las municipalidades, de los establecimientos y corporaciones nacionales, y de los individuos particulares que tienen la libre administración de lo suyo”*.

Indica que, debe considerarse que en la especie se ha ejercido una acción de contenido patrimonial que persigue hacer efectiva la responsabilidad extracontractual del Estado, por lo que no cabe sino aplicar, en materia de prescripción, las normas del Código Civil, lo que no contraria la naturaleza especial de la responsabilidad que se



persigue, en atención a que la acción impetrada pertenece -como se ha dicho- al ámbito patrimonial.

En relación con las alegaciones expuestas por la actora en cuanto a que la acción patrimonial que persigue la reparación por los daños reclamados sería imprescriptible conforme al derecho internacional de los derechos humanos, hace presente que:

1.- Respecto a la “Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad”, aprobada por Resolución N° 2.391 de 26 de noviembre de 1968, y en vigor desde el año 1970, en su artículo 1° letras a) declara imprescriptibles a “los crímenes de guerra; y b) a los crímenes de lesa humanidad; pero cabe señalar -tal como lo ha reconocido la Excma. Corte Suprema- que en ninguno de sus artículos declara la imprescriptibilidad de las acciones civiles para perseguir la responsabilidad pecuniaria del Estado por estos hechos, limitando esta imprescriptibilidad a las acciones penales.

2.- Los Convenios de Ginebra de 1949, ratificados por Chile en 1951, se refieren exclusivamente a las acciones penales para perseguir la responsabilidad de los autores de los delitos de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, de modo tal que no cabe extender la imprescriptibilidad a las acciones civiles indemnizatorias, tal como ha resuelto el Máximo Tribunal.

3.- La Resolución N° 3.074 de 3 de diciembre de 1973, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, denominada “Principios de Cooperación Internacional para el descubrimiento, el arresto, la extradición y el castigo de los culpables de crímenes contra la humanidad”, la cual se refiere exclusivamente a las acciones penales para perseguir la responsabilidad de los autores de los delitos de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, de modo tal que no se podría extender la imprescriptibilidad a las acciones civiles indemnizatorias.

4.- La Convención Americana de Derechos Humanos, destacando que en relación a esta convención al efectuar la



ratificación, conforme al inciso 2° del artículo 5° de la Carta Fundamental, Chile formuló una reserva en orden a que el reconocimiento de la competencia, tanto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se refiere a hechos posteriores a la fecha del depósito del instrumento de ratificación, de 21 de agosto de 1990, o, en todo caso, a hechos cuyo principio de ejecución sea posterior al 11 de marzo de 1990.

Por otra parte, agrega que el artículo 63 de la Convención se encuentra ubicado en el Capítulo VIII, relativo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, específicamente en la sección segunda de dicho capítulo, referido a la competencia y funciones de esa Corte, facultando exclusivamente a dicha Corte Interamericana para imponer condenas de reparación de daños y, por lo mismo, no impide la aplicación del derecho interno nacional ni de la institución de la prescripción en Chile.

Afirma que no habiendo, en consecuencia, norma expresa de derecho internacional de derechos humanos, debidamente incorporada a nuestro ordenamiento jurídico interno, que disponga la imprescriptibilidad de la obligación estatal de indemnizar, y no pudiendo tampoco aplicarse por analogía la imprescriptibilidad penal en materia civil, no se puede apartar del claro mandato de la ley interna al resolver esta contienda y aplicar las normas contenidas en los artículos 2332 y 2497 del Código Civil, que establecen las reglas sobre prescriptibilidad de la responsabilidad patrimonial del Estado.

III.- En cuanto al daño e indemnización reclamada:

Con relación al daño moral, la parte demandada hace presente que los llamados daños no patrimoniales recaen sobre elementos de difícil o imposible estimación pecuniaria, ya que su contenido no es económico, o al menos no directamente. Ello produce a su respecto una imposibilidad latente e insuperable de evaluación y apreciación pecuniaria.



Señala que la indemnización del daño puramente moral no se determina cuantificando, en términos económicos, el valor de la pérdida o lesión experimentada, sino solo otorgando a la víctima una satisfacción, ayuda o auxilio que le permita atenuar el daño, morigerarlo o hacerlo más soportable, mediante una cantidad de dinero u otro medio, que en su monto o valor sea compatible con esa finalidad meramente satisfactiva.

Advierte que tampoco resulta procedente invocar la capacidad económica del demandante y/o del demandado como elemento para fijar la cuantía de la indemnización, pues, como se ha dicho, el juez solo está obligado a atenerse a la extensión del daño sufrido por la víctima, en la cual no tienen influencia estas capacidades.

Manifiesta que las cifras pretendidas en la demanda como compensación del daño moral (\$150.000.000), resulta excesivas teniendo en consideración las acciones y medidas de reparación adoptadas por el Estado de Chile en esta materia, y los montos promedios fijados por los tribunales de justicia, que en esta materia han actuado con mucha prudencia.

Continúa su defensa, señalando que en subsidio de las alegaciones opuestas, la regulación del daño moral debe considerar los pagos ya recibidos del Estado, y guardar armonía con los montos establecidos por los Tribunales.

Manifiesta respecto a los reajustes e intereses demandados, que los primeros solo pueden devengarse en el caso de que la sentencia que se dicte en la causa acoja la demanda, y establezca esa obligación, y además desde que la sentencia se encuentre firme o ejecutoriada. Así, a la fecha de notificación de la demanda de autos, y mientras no exista sentencia, firme o ejecutoriada, ninguna obligación tiene su representado de indemnizar, y por tanto no existiría ninguna suma que deba reajustarse.

Sostiene que los reajustes que procedieren de ninguna manera podrían contabilizarse desde una fecha anterior a aquella en que la sentencia que los concede se encuentre firme o ejecutoriada, ya que



el reajuste es un mecanismo económico-financiero que tiene por objeto neutralizar el efecto que los procesos inflacionarios o deflacionarios tienen sobre la moneda de curso legal.

Respecto de los intereses, el artículo 1551 del Código Civil establece expresamente que el deudor no está en mora sino cuando ha sido judicialmente reconvenido y ha retardado el cumplimiento de la sentencia.

Por consiguiente, en el hipotético caso de que se acogiera la acción de autos y condene a su representado al pago de una indemnización de perjuicios, sostiene que tales reajustes e intereses solo podrán devengarse desde que la sentencia condenatoria se encuentre firme o ejecutoriada.

Concluye solicitando tener por contestada la demanda civil deducida en autos, y, en definitiva, acoger las excepciones y defensas opuestas, y rechazar la demanda en todas sus partes, con costas, o en subsidio, rebajar sustancialmente el monto indemnizatorio pretendido.

Con fecha 19 de enero de 2022, la parte demandante evacua el trámite de la réplica, ratificando los fundamentos señalados en la demanda.

Señala que no está de acuerdo con el razonamiento de la excepción de reparación integral, ya que, en el mejor de los casos, los montos que otorga la referida ley (y las dictadas con posterioridad) sólo constituyen pensiones de sobrevivencia por los brutales actos cometidos por el Estado en el período comprendido entre 1973 y 1990, pero tales pensiones en ningún caso reparan íntegramente el daño, dolor, sufrimientos y secuelas psicológicas y físicas, experimentadas por don Sergio Manríquez, en su calidad de víctima de prisión y tortura.

Añade que nunca un tribunal de la República ha fijado el monto de la reparación que debe obtener don Sergio Manríquez, por lo que no sería entonces un crédito líquido y actualmente exigible.



Con todo, lo que sí ha quedado en evidencia incluso de lo dicho por la defensa fiscal, es el reconocimiento de que en la persona de don Sergio Manríquez, se ha cometido un crimen de lesa humanidad, y que ese crimen produjo un daño moral a la víctima.

En cuanto a la excepción de prescripción, reitera la fundamental diferencia entre las reglas de la prescripción extintiva del Código Civil que buscan sancionar al acreedor negligente, o el régimen normativo aplicable a la reparación de daños causados por animales fieros, por remover las losas de una acequia, por personas ebrias u objetos que caen de la parte superior de un edificio. En resumen, alude que el principio jurídico universalmente reconocido es que los delitos de Lesa Humanidad no prescriben, tanto en su investigación, en su sanción y en su reparación.

En cuanto al monto de la indemnización, arguye que no hay dinero que supla el dolor experimentado por el demandante, víctima de prisión política y tortura, pero en todo caso, en la parte petitoria de la demanda se señala, en subsidio, que se condene a “la suma que el tribunal estime ajustada a derecho, justicia y equidad” conforme el mérito de autos.

Sobre la procedencia del cobro de reajustes, destaca que es el juez de instancia quien determina la cuantía de las reparaciones, por lo que procede que estas sean reajustadas desde la dictación del fallo de primera instancia, puesto que este es el momento procesal en que queda fijado el monto de reparación.

Con fecha 4 de febrero de 2022, la parte demandada evacuó el trámite de la dúplica, ratificando la totalidad de las argumentaciones expresadas en el escrito de contestación.

Subraya que en relación a la prescripción de la acción deducida, reitera la importancia de la sentencia de unificación de jurisprudencia dictada por el Pleno de la Excma. Corte Suprema con fecha 21 de enero de 2013 en los autos Rol 10.665-2011 “Episodio Colegio Médico-Eduardo González Galeno”. En dicho fallo se concluye que las acciones por responsabilidad extracontractual en contra del Estado



prescriben en el plazo de cuatro años desde la perpetración de los hechos, conforme a lo dispuesto en el artículo 2332 del Código Civil.

Con fecha 15 de febrero de 2022, se recibió la causa a prueba.

Con fecha 17 de agosto de 2022, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que don Sergio Patricio Manríquez Zamorano interpuso demanda de indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile, representado por don Juan Antonio Peribonio Poduje, en su calidad de Presidente del Consejo de Defensa del Estado, todos ya singularizados, con base en los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho latamente consignados en lo expositivo de la presente sentencia.

SEGUNDO: Que la demandada contestó el libelo al tenor de lo narrado en lo expositivo de este fallo.

TERCERO: Que se recibió la causa a prueba, y se fijaron los siguientes hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos respecto de los cuales debía recaer la prueba:

1. Efectividad que la demandante ha sufrido los perjuicios descritos en el libelo pretensor. En la afirmativa, naturaleza y monto de los perjuicios.
2. En su caso, efectividad de que dichos perjuicios son imputables al actuar de la demandada.
3. Relación de causalidad entre el actuar de la demandada y los perjuicios demandados.
4. Efectividad de que la demandante fue resarcida por el daño extrapatrimonial alegado. En la afirmativa, tipo de reparación obtenida y efectividad de ser satisfactiva.

CUARTO: Que a objeto de acreditar sus asertos, la parte demandante acompañó a los autos los siguientes documentos:



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CDXXXCBJDNR

1. Certificado de nacimiento de don Sergio Manríquez Zamorano.
2. Ficha del Instituto Nacional de Derechos Humanos, correspondiente a don Sergio Manríquez Zamorano.
3. Ficha del Instituto Nacional de Derechos Humanos, correspondiente a doña María Luz Soto Urbina.
4. Certificado emitido por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, respecto a la situación de víctima política de don Sergio Manríquez Zamorano.
5. Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, que contiene la Nómina de personas reconocidas como víctimas.
6. Presentación realizada por el Psicólogo Freddy Silva G, en su calidad de Coordinador del Equipo PRAIS, alusiva a las “Características del daño y trauma en afectados directos de violaciones a los Derechos Humanos”.
7. Presentación realizada por el Psicólogo Freddy Silva G, en su calidad de Coordinador Especializado del Equipo PRAIS, alusiva a la “Transgeneracionalidad del daño generado a víctimas de violación a los Derechos Humanos”.
8. Copia de Conferencia Internacional denominada “Consecuencias de la Tortura en la Salud de la Población Chilena”, del Ministerio de Salud de Chile.
9. Copia de informe intitulado “Términos generales sobre las secuelas dejadas en el plano de la salud mental relacionadas con las violaciones a los Derechos Humanos, cometidas durante la dictadura militar”, suscrito por doña Paula Hinojosa Oliveros, Psicóloga de PRAIS.
10. Copia de informe denominado “Algunos problemas de salud mental detectados por equipo psicológico-psiquiátrico”, elaborado por la Vicaria de la Solidaridad.



11. Copia de informe denominado “Algunos Factores de Daño a la Salud Mental”, elaborado por la Vicaria de la Solidaridad. (Programa de salud).
12. Copia de informe alusivo a “La tortura, tratos crueles e inhumanos y su impacto psicológico, las prácticas de amedrentamiento a la población, relegaciones y su impacto psicológico en las personas y en la familia”, entre otros.
13. Copia de informe denominado “Trabajo Social, una experiencia solidaria en la promoción y defensa de los Derechos Humanos”, elaborado por Victoria Baeza Fernández, Norma Muñoz Peñailillo, María Luisa Sepúlveda Edwards, Ximena Taibo Grossi, Asistentes Sociales del Departamento Jurídico de la Vicaria de la Solidaridad.
14. Copia de informe denominado “Salud Mental y Violaciones a los Derechos Humanos”, elaborado por el equipo de salud de la Vicaria de la Solidaridad, integrado por los Doctores. Andrés Donoso, Guillermo Hernández, Ramiro Olivares, el Psicólogo Sergio Lucero, y la auxiliar de enfermería Janet Ulloa.
15. Copia de informe realizado por el equipo de profesionales de la salud de La Vicaria de la Solidaridad, denominado “Efectos con la salud física y mental en la población a consecuencia de la represión en las protestas y otras acciones masivas”.
16. Copia de estudio de salud mental en presos políticos en periodo de transición a la democracia, realizado por el Neuropsiquiatra Jacobo Rizzo y la Psicóloga Viviane Freraut del equipo de salud mental del DITT (Detención, Investigación y Tratamiento de la Tortura) y CODEPU (Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo).
17. Estudio Significado psicosocial de la tortura, ética y reparación, realizado por doña Elisa Neumann, psicóloga y por



don Rodrigo Erazo, psiquiatra, del equipo médico psiquiátrico de FASIC.

18. Monografía denominada “Lo Igual y lo Distinto en los Problemas Psicopatológicos Ligados a la Represión Política”, realizada por el Psiquiatra Mario Vidal del Centro de Salud Mental y Derechos Humanos (CINTRAS).
19. Estudio denominado “Trauma Político y Memoria Social”, realizado por E. Lira y M. Castillo, del Instituto Latinoamericano de Salud Mental y Derechos Humanos (ILAS).
20. Ponencia denominada “Tortura y Trauma Psicosocial”, realizada por el Médico Psiquiatra Carlos Madariaga, miembro del Comité Directivo y director clínico de CINTRAS, integrante del Consejo Internacional de Rehabilitación para Víctimas de la Tortura (IRCT).
21. Estudio denominado “Consecuencias Psicosociales de la Represión Política”, realizado por la Psicóloga Elizabeth Lira.
22. Monografía denominada “Aspectos Psicosociales de la Represión Durante la Dictadura”, realizado por María Teresa Almarza, Psicóloga del Centro de Salud Mental y Derechos Humanos (CINTRAS).
23. Monografía denominada “Tortura y trauma: El viejo dilema de las taxonomías psiquiátricas”, realizada por el Psiquiatra Carlos Madariaga, de CINTRAS.
24. Estudio denominado “Las peores cicatrices no siempre son físicas: la tortura psicológica”, realizado por el doctor Hernán Reyes, de la división de asistencia de la Cruz Roja Internacional.
25. Capítulo III (3) del Informe de la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura, titulado: Contexto. “Con este capítulo la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura aspira a



describir un contexto básico para la mejor comprensión de la represión política verificada durante el régimen militar” (Informe Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura Pág. 169).

26. Copia de Informes denominados “La Tortura Modelo de Intervención” y “La Tortura Un Problema Médico”, emitidos y realizados por el equipo de salud mental de la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC).
27. Copia de Informe denominado “Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos” realizado por el equipo de profesionales de salud mental del Instituto Latino Americano de Salud Mental y Derechos Humanos (ILAS).
28. Copia de la Norma Técnica N° 88 “Norma Técnica para la Atención de Personas Afectadas por la Represión Política Ejercida por el Estado en el periodo 1973 – 1990”.
29. Copia del Capítulo VIII “Consecuencias de la prisión política y tortura” del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura.
30. Sentencia dictada con fecha 29 de noviembre de 2018 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Órdenes Guerra y otros vs. Chile”.
31. Contestación del Estado de Chile ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Órdenes Guerra y otros vs Chile”, de fecha febrero de 2018.
32. Sentencias de casación y de reemplazo pronunciadas por la Corte Suprema con fecha 9 de diciembre de 2019, Rol 16950-2019, caratulada “Calderón con Fisco de Chile”.
33. Sentencias de casación y de reemplazo pronunciadas por la Corte Suprema con fecha 6 de diciembre de 2019, Rol 18179-2019, caratulada “Torres con Fisco de Chile”.



34. Sentencias de casación y de reemplazo pronunciadas por la Corte Suprema con fecha 24 de diciembre de 2021, Rol 13877-2019, “Episodio Augusto Ramón Cepeda Venegas”, (considerandos 16º y siguientes).

35. Artículo titulado “Algunos Factores de Daño a la Salud Mental, elaborado por el Programa de Salud Mental de la Vicaría de la Solidaridad e incorporados en los autos Rol C-22561-2018, del 28º Juzgado Civil de Santiago.

QUINTO: Que, de igual modo, la parte demandante ofreció prueba testifical, consistente en las declaraciones de doña Margarita Soto Urbina y don Manuel Padilla Ballesteros, brindadas en audiencia de fecha 10 de mayo de 2022.

SEXTO: Que a su turno, la demandada acompañó oficio respuesta del Jefe del Departamento Secretaría General y Transparencia del Instituto de Previsión Social (IPS), de data 1º de febrero de 2022, dando cuenta de todos los beneficios reparatorios del Estado y los montos totales que ha obtenido don Sergio Patricio Manríquez Zamorano.

SÉPTIMO: Que son hechos indiscutidos en la presente causa, por no haber mediado controversia entre las partes, los siguientes:

1.- Que en noviembre de 1974, don Sergio Patricio Manríquez Zamorano fue detenido junto a su cónyuge, suegro y cuñado, por parte de militares-agentes del Estado, siendo trasladados al Regimiento Tacna, y posteriormente, en calidad de detenidos a la denominada “Venda Sexy”, “Tres Álamos”, “Cuatro Álamos”, y por último a Ritoque, cautiverio que se extendió hasta el mes de mayo de 1975, en que fue puesto en libertad.

2.- Que durante el periodo de detención ilícito, el actor y miembros de su familia también arrestados, fueron objeto de torturas y vejámenes físicos, psicológicos y de índole sexual.



3.- Que una vez puestos en libertad, el demandante y su núcleo familiar se fueron del país con rumbo a Venezuela, en donde permanecieron hasta el año 1982.

4.- Que el actor ha sido reconocido como víctima de violación a los Derechos Humanos por el Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, bajo el número de registro 13.947.

OCTAVO: Que la presente acción corresponde a una demanda de indemnización de perjuicios, deducida por don Sergio Patricio Manríquez Zamorano en contra del Fisco de Chile, por el daño moral sufrido en su calidad de víctima de prisión política y tortura durante el régimen militar.

Luego, sin perjuicio de analizar si concurren los requisitos para acoger la pretensión del actor, concierne referirse previamente a las defensas esgrimidas por el demandado, las que se circunscriben a la reparación integral por haber sido ya indemnizada, y a la prescripción.

NOVENO: Que, en efecto, alega la demandada que el actor ya se encontraría indemnizado de los perjuicios padecidos, por haber recibido su reparación integral mediante transferencias de dinero, beneficios de salud (PRAIS) y gestos simbólicos, de manera que al haberse compensado los daños morales sufridos, no pueden ser exigidos nuevamente.

DÉCIMO: Que conforme a lo informado por el Instituto de Previsión Social, consta que el demandante ha recibido como reparación la cantidad total de \$36.558.455, suma de la cual \$34.995.802 corresponden a pensión por beneficio Ley N° 19.992; \$1.000.000 por concepto de Aporte Único Ley N° 20.874 y \$562.653 por concepto de aguinaldos, siendo su pensión mensual actual de \$237.811.

UNDÉCIMO: Que las transferencias de dinero realizadas al actor, los beneficios de salud y las reparaciones simbólicas a que alude la demandada, no implican –necesariamente– la reparación íntegra de los daños padecidos por el demandante en su calidad de



víctima de prisión política y tortura, y que el Estado de Chile se encuentra obligado a proporcionar.

En efecto, el propio artículo 24 de la Ley N° 19.123 prescribe en su inciso primero que: *“La pensión de reparación será compatible con cualquiera otra, de cualquier carácter, de que goce o que pudiere corresponder al respectivo beneficiario”*, reconociendo que éste puede obtener otras reparaciones, como sería aquella decretada, de ser procedente, por los tribunales de justicia vía acción indemnizatoria.

Lo anterior, se fundamenta considerando que las reparaciones otorgadas por la legislación, han sido concedidas y determinadas por el propio Estado, en términos generales y únicos a las víctimas de violaciones a los derechos humanos y sus familiares, de manera que su efecto reparador no necesariamente es pleno.

Además, los beneficios otorgados por la Ley N°19.123, dicen relación más bien con prestaciones de carácter asistencial y patrimonial, lo que marca una diferencia ostensible con la reparación del daño moral. Así, las pensiones mensuales de reparación, la bonificación compensatoria, los beneficios médicos y educacionales, guardan una mayor armonía con los conceptos de daño emergente y lucro cesante, de manera que de estimarse y probarse que el daño moral inferido excede las mencionadas pensiones o es independiente a ellas, no existe razón suficiente como para, de antemano, rechazar la demanda.

En el mismo sentido se viene pronunciando la jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia: *“La normativa invocada por el Fisco – que sólo establece un sistema de pensiones asistenciales- no contempla incompatibilidad alguna con las indemnizaciones que aquí se persiguen y no es procedente suponer que ella se dictó para reparar todo daño moral inferido producto de atentados a los derechos humanos, ya que se trata de formas distintas de reparación, y que las asuma el Estado voluntariamente, como es el caso de la legislación en que se asila el demandado, no importa la renuncia de una de las partes o la prohibición para que el sistema jurisdiccional declare su*



procedencia, por los medios que autoriza la ley” (Sentencia Excm. Corte Suprema en causa Rol Nº 12.636-2018).

Conforme a lo que se ha venido exponiendo, cabe desestimar la excepción de reparación integral opuesta por el demandado, sin perjuicio de tener presente el hecho al momento de fijar el monto de la eventual indemnización.

DUODÉCIMO: Que respecto a la excepción de prescripción extintiva, el Fisco de Chile indica que entre la fecha en que se hizo exigible la indemnización y la fecha de notificación de la acción, ha transcurrido en exceso el plazo de cuatro años que contempla el artículo 2332 del Código Civil, por tratarse de una materia de responsabilidad extracontractual; y en subsidio, en caso que se estime que la norma anterior no es aplicable al caso de autos, opone la excepción de prescripción extintiva de cinco años contemplada para las acciones y derechos en el artículo 2515 relación al artículo 2514, ambos del Código Civil.

DÉCIMO TERCERO: Que la excepción de prescripción opuesta lleva a cuestionarse si la acción civil que deriva de un delito de lesa humanidad, se aviene a las normas internas que rigen en el ámbito patrimonial donde está consagrada esta institución, o bien, por el contrario, y por la trascendencia de la materia en discusión, escapa de la reglamentación interna, sometiéndose a una normativa suprallegal e internacional, relativa a los Derechos Humanos.

Tal cuestionamiento –y la postura que se adopte- no resulta trivial. En efecto, de estimarse que la prescripción opera íntegramente en estos casos, la acción civil derivada de dichos ilícitos podría prescribir al transcurrir cinco años de cometidos los hechos, o desde la fecha en que existiera certeza que la actora pudo ejercer la acción. A la inversa, de considerarse que la reglamentación patrimonial es inaplicable, la acción civil sería imprescriptible.

DÉCIMO CUARTO: Que para zanjar tal problemática, es preciso considerar que, si bien no existe norma -ni nacional ni internacional- que se pronuncie derechamente sobre el particular, este silencio legal



no es compartido en lo relativo a la acción penal derivada de esta clase de delitos, en que claramente se ha establecido que dicha acción es imprescriptible (a modo ejemplar la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad).

Esta postura, determinante en el ámbito penal, se justifica comprendiendo la gravedad de las conductas que se persigue sancionar, consistente en la maquinación coordinada de los agentes del Estado en desmedro de los derechos fundamentales de las personas.

Ahora, si bien no existe dicho dictamen en el área civil, el mismo fundamento puede extrapolarse a este ámbito. Más aún, los tratados internacionales relativos a Derechos Humanos integrados a nuestra normativa conforme al inciso segundo del artículo 5º de la Carta Fundamental- y la propia legislación interna dictada a consecuencia de dichos crímenes, propenden a una reparación integral tanto de sus víctimas como de sus familiares, lo que necesariamente incluye el resarcimiento monetario, el que por derivar de un delito de lesa humanidad, trasciende su naturaleza meramente patrimonial, marcando un contraste con el ilícito civil común.

Así las cosas, la reparación integral que se persigue para aquellos que han sido víctimas de los actos ejecutados por el Estado de Chile en tiempos del régimen militar, debe incluir tanto una persecución penal y un resarcimiento civil que no esté condicionado por el transcurso del tiempo. Solo así, una vez indemnizadas todas aquellas personas que fueron afectadas en dicho período por actos de agentes del Estado, se cumplirá con aquella reparación completa a que Chile se ha comprometido tanto internacionalmente como ante el propio país.

DÉCIMO QUINTO: Que en este mismo sentido se ha pronunciado la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, al consignar: *“en el caso de delitos de lesa humanidad, como el que sustenta la demanda de los actores, siendo la acción penal*



persecutoria imprescriptible, no resulta coherente entender que la acción civil indemnizatoria esté sujeta a las normas sobre prescripción contenidas en la ley civil interna, ya que ello contraría la voluntad expresa manifestada por la normativa internacional sobre Derechos Humanos, integrante del ordenamiento jurídico nacional de acuerdo con el inciso segundo del artículo 5º de la Carta Fundamental, que consagra el derecho de las víctimas y otros legítimos titulares a obtener la reparación integral de todos los perjuicios sufridos a consecuencia del acto ilícito, e incluso por el propio derecho interno, ...” (Sentencia Excma. Corte Suprema, Rol N°12.636-2018).

Con todo lo dicho, dada la naturaleza y contexto de los ilícitos fundantes, esta sentenciadora se inclina por la postura de una imprescriptibilidad no solo penal, sino también civil, lo que conducirá al rechazo de la excepción de prescripción opuesta.

DÉCIMO SEXTO: Que, ahora, entrando en el fondo de la discusión de estos autos, cabe reiterar que el actor demanda indemnización de perjuicios por el daño moral sufrido, con ocasión de la privación de libertad por motivos políticos y torturas de que fue objeto en el lapso que medió entre noviembre de 1974 y mayo de 1975 por parte de agentes del Estado, hecho indiscutido y no desconocido por la demandada, e incluso calificado como víctima del listado de prisioneros políticos y torturados.

Por consiguiente, siendo inconcuso el hecho dañoso del que deriva la responsabilidad del Estado hecha valer, cabe centrarse en la demostración del detrimento moral alegado por el demandante.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que el daño moral es, en términos generales, el menoscabo o agravio a un derecho subjetivo de carácter inmaterial o inherente a la persona y que es imputable a dolo o culpa de otro, que estaba obligado a respetarlo, en la especie, el Estado de Chile.

El daño moral tiene su causa en la transgresión al ordenamiento jurídico y su consecuencia es el sufrimiento causado en la víctima, producto de la limitación a un interés legítimo. Así, la persona titular de



un derecho subjetivo o de un bien jurídico, al ser despojada de su legítimo goce, se le priva de su ejercicio y sufre como consecuencia un daño extrapatrimonial.

DÉCIMO OCTAVO: Que el daño moral debe ser probado por quien lo reclama, toda vez que éste constituye un presupuesto para el origen de la responsabilidad civil.

DÉCIMO NOVENO: Que si bien la demandada no ha cuestionado la configuración del daño moral padecido por el actor -sino más bien la suma pedida a su respecto-, en aras de demostrar la conculcación de derechos humanos, la parte demandante, a más de la profusa prueba documental acompañada en autos, ofreció prueba testifical que avala sus asertos.

VIGÉSIMO: Que en efecto, doña Margarita Soto Urbina, cuñada del demandante, declara el período que el actor estuvo privado de libertad y los apremios a que fue sometido.

Por su parte, el testigo don Manuel Padilla Ballesteros, también detenido, supo de las torturas y apremios físicos de que fue objeto el demandante, afirmando que correspondía a una situación especial ya que casi toda su familia estuvo detenida en la Venda Sexy. Indica que el actor perdió su trabajo, se tuvo que ir al exilio junto con su familia y también que su mujer e hijos sufrieron la persecución. Agrega que vivía en una cómoda casa en Santiago y tuvo que dejarla porque corría peligro de muerte.

VIGÉSIMO PRIMERO: Que a partir de estos testimonios, en conjunción con la información documental allegada, es dable concluir que la vida del actor experimentó un vuelco, luego de la detención y sobre todo por las más abyectas torturas que padeció, tanto él como su cónyuge, con repercusiones en su dinámica familiar y laboral, que incluso significó abandonar el país por un tiempo, debiendo reinventar sus vidas en el exilio con muchas dificultades.

VIGÉSIMO SEGUNDO: Que teniendo especialmente en cuenta el período que permaneció privado de libertad el actor y los apremios a que se vio sometido en ese tiempo, hechos que es de presumir



afectaron la salud mental del demandante, pese a no existir un informe psicológico que corrobore lo anterior, o precise las magnitudes del daño señalado, se avalúa prudencialmente el daño moral padecido por el actor en la suma de \$30.000.000.- (treinta millones de pesos).

VIGÉSIMO TERCERO: Que la suma mencionada será reajustada conforme a la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor desde la fecha de dictación del fallo, mientras que los intereses corrientes se devengarán desde que la sentencia se encuentre ejecutoriada.

VIGÉSIMO CUARTO: Que atendido lo dispuesto en el artículo 144 del Código de Procedimiento Civil, estimando que la demandada ha tenido motivo plausible para litigar, se le eximirá del pago de las costas.

Por estas consideraciones, y teniendo presente lo dispuesto en los artículos 47, 222, 224, 236, 1437, 1700, 1706, 2492 y 2518 del Código Civil; artículos 144, 160, 170, 342, 346, 384, 426, 427 y 428 del Código de Procedimiento Civil, se declara:

I.- Que se rechazan las excepciones de reparación integral y prescripción.

II.- Que se acoge parcialmente la demanda de indemnización de perjuicios deducida y, en consecuencia, se condena al Fisco de Chile a pagar a don Sergio Patricio Manríquez Zamorano, la suma de \$30.000.000.- (treinta millones de pesos) a título de daño moral.

III.- Que la cantidad mencionada se reajustará conforme a la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor desde la fecha de dictación del fallo, y devengará intereses corrientes desde que la sentencia se encuentre ejecutoriada.

IV.- Que no se condenará en costas a la demandada por estimar que tuvo motivo plausible para litigar.

Notifíquese, regístrese y archívese, en su oportunidad.

Rol C-7952-2021



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CDXXXCBJDNR

Pronunciada por doña Daniela Royer Faúndez, Juez Titular.

En **Santiago**, a **nueve de Diciembre de dos mil veintidós**, se notificó por el estado diario, la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CDXXCBJDNR